

**EXPEDIENTE 6870-2023**

**CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD:** Guatemala, nueve de mayo de dos mil veinticuatro.

En apelación y con sus antecedentes, se examina la sentencia de siete de septiembre de dos mil veintitrés, dictada por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en la acción constitucional de amparo promovida por el Estado de Guatemala, por medio del abogado de la Procuraduría General de la Nación, Ronald Stuardo Álvarez Lima, contra la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. El postulante actuó con el patrocinio del abogado que lo representa quien posteriormente fue sustituido por las abogadas Claudia Alejandra Cáceres Figueroa y Cindy Priscilla Salguero Corado. Es ponente en el presente caso la Magistrada Vocal III, Dina Josefina Ochoa Escribá, quien expresa el parecer de este Tribunal.

**ANTECEDENTES**

**I. EL AMPARO**

**A) Solicitud y autoridad:** presentado el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, en la Sección de Amparo de la Corte Suprema de Justicia. **B) Acto reclamado:** sentencia de diez de febrero de dos mil veintiuno, proferida por la Sala cuestionada que declaró con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el demandante y como consecuencia, revocó la emitida por el Juzgado Undécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala y declaró con lugar parcialmente la demanda ordinaria laboral por despido directo e injustificado que Carlos Juan Antonio Rodríguez Chang promovió contra el Estado de Guatemala, autoridad nominadora (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación) y lo condenó al pago de indemnización, prestaciones laborales,



salario pendiente de pago daños y perjuicios. **C) Violaciones que denuncia:** a su derecho de defensa y a una debida tutela judicial, así como a los principios jurídicos de debido proceso, de tutelaridad y de legalidad. **D) Hechos que motivan el amparo:** de lo expuesto por el postulante y de los antecedentes, se resume: **D.1) Producción del acto reclamado:** a) en el Juzgado Undécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala, Carlos Juan Antonio Rodríguez Chang promovió juicio ordinario laboral contra el Estado de Guatemala (autoridad nominadora: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación) en el que reclamó el pago de indemnización, vacaciones, aguinaldo, bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, bonificación incentivo económico, salario pendiente de pago correspondiente a los quince días del mes de enero de dos mil dieciocho, daños y perjuicios, bonificación por servicios al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, bono escolar, bono por responsabilidad, bono por día del trabajador y bonificación anual, aduciendo que fue despedido el quince de enero de dos mil dieciocho de forma directa e injustificada del puesto que ocupó como “*Profesional Economista Sectorialista*” en el mencionado Ministerio, desde el uno de febrero de dos mil trece, con un salario mensual de quince mil quetzales (Q. 15,000.00); con cargo al renglón presupuestario cero veintinueve (029); **b)** el Estado de Guatemala contestó la demanda en sentido negativo argumentando que no existió relación laboral con el actor sino la prestación de servicios técnicos mediante contratos administrativos en el renglón presupuestario cero veintinueve (029), por lo que no correspondía el pago de prestación laboral alguna; **c)** el juzgado mencionado, al resolver, en sentencia de treinta de abril de dos mil diecinueve, declaró sin lugar la demanda relacionada y, como consecuencia, absolvió al demandado de los rubros pretendidos, sin hacer especial



condena en costa judiciales; y **d)** contra esa decisión la parte actora apeló, por lo que se elevaron las actuaciones a la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social **—autoridad cuestionada—**, quien al resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante, declaró con lugar parcialmente el recurso de apelación planteado por el demandante, revocó sentencia emitida por el Juzgado Undécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala y, como consecuencia declaró sin lugar la contestación en sentido negativo de la demanda y oposición a la misma por el demandando, resolvió con lugar parcialmente la demanda ordinaria laboral y condenó al pago de: i) indemnización, ii) vacaciones, iii) aguinaldo, iv) bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, v) bonificación incentivo (todas las prestaciones por el periodo comprendido del uno de febrero de dos mil trece al quince de enero de dos mil dieciocho), vi) salario pendiente de pago correspondiente a los quince días del mes de enero de dos mil dieciocho y vii) daños y perjuicios; y lo absolvió del pago de: i) bonificación por servicios al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ii) bono escolar, iii) bono por responsabilidad, iv) bono por día del trabajador y v) bonificación anual **—acto reclamado—**. **D.2) Agravios que se reprochan al acto cuestionado:** el accionante estima que el acto reclamado le provoca agravio porque: **a)** le vulneró derechos y garantías constitucionales de conformidad a lo regulado en los artículos 2 y 12 constitucionales y varios fallos emitidos por esta Corte al respecto; **b)** la autoridad cuestionada condenó al Estado de Guatemala al pago de indemnización, prestaciones laborales y salarios pendientes de pago, pese a que no procedían, derivado a que, lo sucedido fue el vencimiento del plazo del último contrato y no un despido directo e injustificado como pretende hacer creer la parte actora, de esa cuenta inobservó lo regulado en



el artículo 86 del Código de Trabajo, respecto a la facultad del contratante de finalizar el contrato de forma unilateral sin responsabilidad de su parte; **c)** lo que existió fue una relación contractual de prestación de servicios profesionales y se aplicó lo pactado en el último contrato suscrito entre las partes, respecto de la extinción de dicho vínculo, siendo legal la celebración de contratos a plazo fijo, de conformidad a lo regulado en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público; **d)** era improcedente la condena al pago de daños y perjuicios, puesto que, estos no fueron generados y aunado a ello, no se tomó en cuenta lo preceptuado en el artículo 110 constitucional, respecto, que no existe obligación para el Estado de Guatemala y sus entidades al pago por este rubro sino únicamente el de indemnización siempre y cuando se produzca despido injustificado y no se pruebe la justa causa del mismo, lo que no ocurre en el presente caso y además no existió relación laboral; **e)** al no existir relación laboral hacía improcedente la condena al pago de vacaciones, puesto que, entre las partes se suscribieron contratos administrativos de servicios profesionales, además requiere como condición que el demandante percibiera como retribución económica un salario, de esa cuenta al no cumplirse con las mismas no puede obligarse al pago de dichos beneficios, por existir libertad contractual entre las partes, de conformidad con la legislación civil y como quedó demostrado que le hacía efectivo al actor, el pago de honorarios, lo que no sucede en el caso de servidores o empleados públicos; **f)** al condenar al pago de bono anual para trabajadores del sector privado y público, se inobservó lo regulado en la Ley de Bonificación Anual para Trabajadores del Sector Privado y Público, respecto a que este beneficio le corresponde a aquellas personas que tienen un vínculo de carácter laboral o contrato de trabajo de carácter indefinido, lo que no ocurrió en el



presente caso, pues, se suscribieron entre las partes contratos administrativos de servicios profesionales con respaldo en la Ley de Contrataciones del Estado y las personas contratadas bajo este régimen quedan fuera del ámbito de aplicación de dicha ley por no ser trabajadores del Estado; **g)** era improcedente la condena al pago de aguinaldo al no existir el pago de salario como prestación principal y que este generara la prestación accesorio, además este se paga a los servidores públicos de forma anual sin embargo en el presente caso la parte actora no tuvo esa calidad y por ser los servicios prestados de tipo administrativo no le correspondía dicha prestación; **h)** entre las partes no existió relación laboral, por ende no hubo despido directo e injustificado como lo argumentó la parte demandante, de tal cuenta no se debió condenar al Estado de Guatemala al pago de indemnización, prestaciones laborales y daños y perjuicios, por lo anterior la autoridad cuestionada actuó al margen de su competencia legal y dictó una sentencia incongruente con los hechos y fundamentos legales, carente de motivación y fundamentación. **D.3) Pretensión:** solicitó que se otorgue el amparo y, como consecuencia, se deje en suspenso el acto reclamado y se hagan las prevenciones y declaraciones que en Derecho correspondan. **E) Uso de recursos:** ninguno. **F) Caso de procedencia:** invocó el contenido de las literales a), d) y h) del artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. **G) Normas que se estiman violadas:** citó los artículos 2º, 4º, 12, 28, 108, 203, 205 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 12, 19, 20, 21, 27, 33 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 1, 3, 4, 9, 10, 13 y 16 de la Ley del Organismo Judicial.

## II. TRÁMITE DEL AMPARO

**A) Amparo provisional:** se denegó. **B) Terceros interesados:** i) Carlos Juan



Antonio Rodríguez Chang; ii) Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

**C) Antecedentes remitidos:** disco compacto que contiene copia electrónica de las partes conducentes de los expedientes formados con ocasión de: **a)** juicio ordinario laboral identificado con el número 01173-2018-01269 del Juzgado Undécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala; y **b)** recurso de apelación del expediente referido, tramitado en la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, recurso dos (2). **D) Medios de comprobación:** se relevó del periodo de prueba. **E) Sentencia de primer grado:**

la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, **consideró:** "(...) se procede a resolver el asunto sometido a conocimiento de esta Cámara, en el cual se determina que los agravios expuestos por el postulante se contraen a que la relación sostenida con la parte actora fue eminentemente administrativa mediante la suscripción de contratos para la prestación de servicios profesionales regulada por la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que al no existir ninguna relación de trabajo resultaba improcedente la condena proferida por la Sala increpada. Al respecto, es preciso apuntar que al efectuar el estudio del caso concreto se establece que la autoridad refutada analizó las constancias procesales, las leyes aplicables, los argumentos expuestos y los medios de prueba aportados al juicio, y con base en ello, en la parte considerativa estimó que el demandante laboró en forma ininterrumpida para el empleador mediante la suscripción de diversos contratos administrativos de servicios profesionales, bajo el renglón presupuestario cero veintinueve (029), y que no obstante haberse encubierto con denominación temporal y a plazo fijo, la verdadera naturaleza del vínculo contractual sostenido fue de índole laboral por tiempo indefinido, derivado a que se dio la subordinación típica de todo contrato de trabajo al existir dependencia continuada y dirección





*inmediata, efectuándole el pago o retribución económica por la labor desempeñada; determinación a la que la Sala objetada arribó con sustento en la siguiente apreciación: (...) criterio que es compartido por esta Cámara, ya que denota que el tribunal ad quem cumplió a cabalidad la función que le corresponde, en el sentido de declarar la existencia de la relación laboral, cuando se constata la concurrencia de los elementos esenciales de la misma. Lo anterior, encuentra respaldo en doctrina legal sentada por la Corte de Constitucionalidad (...) De ahí, que en cuanto a lo argüido por el accionante y por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, como tercero interesado, al señalar que el vínculo de la relación sostenida con la parte actora fue de naturaleza administrativa regulada en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como demás leyes afines, siendo dicha normativa la aplicable al presente caso; es importante destacar, que al haber constatado la Sala cuestionada la existencia de una relación de trabajo por tiempo indefinido, se desvanece la posibilidad de aplicación de la normativa citada por el postulante, por regular ésta sobre materia distinta de la reconocida por la autoridad cuestionada. En consonancia con lo anterior, los agravios esgrimidos por el accionante como por la autoridad nominadora al evacuar la audiencia concedida dentro de la presente acción, encaminados a evidenciar la existencia de una relación a plazo fijo, así como la aplicación de la normativa que a su juicio sustenta esta forma de contratación y lo relativo a que el actor percibió honorarios por la prestación de sus servicios; no serán abordadas de forma particularizada, por considerar que han quedado subsumidas y desvanecidas en párrafos precedentes. Congruente con lo anterior, al haber quedado establecido que la verdadera naturaleza de la relación sostenida entre las partes fue de índole laboral por tiempo indefinido y que terminó por decisión unilateral de la parte empleadora sin que*



comprobara la causa justa del despido, sino que en todo caso su defensa se dirigió a negar al vínculo de trabajo que los unió, y que al no haber recibido el empleado las pretensiones laborales (indemnización, vacaciones, aguinaldo, bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, bonificación incentivo, salario pendiente de pago) a que tenía derecho, procedente era la condena al pago de estas así como lo relativo a los daños y perjuicios contemplados en el artículo 78 del Código de Trabajo, como una sanción al patrono por la demora incurrida en el pago de la indemnización correspondiente derivado del despido injustificado que la afectó, pues no consta en autos que se haya demostrado el motivo que justificó la terminación laboral. Respecto a lo que alega el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, como tercero interesado, concerniente a que el actor tenía pleno conocimiento de las condiciones pactadas al suscribir el contrato; se le hace saber que de conformidad con el cuarto considerando inciso c) del Código de Trabajo, el derecho laboral es un derecho necesario e imperativo, de aplicación forzosa en cuanto a las prestaciones mínimas que conceda la ley, de donde se deduce que limita bastante el principio de autonomía de la voluntad propio del derecho común, el cual supone erróneamente que las partes de todo contrato tienen una libre facultad absoluta para perfeccionar un convenio, sin que su voluntad esté condicionada por diversos factores y desigualdades de orden económico social; por lo que, se colige que la jurisdicción privativa del trabajo se encuentra plenamente facultada para desentrañar la naturaleza de lo que realmente aconteció entre las partes, y si en la secuela procesal quedó evidenciado que lo suscitado fue una relación de trabajo encubierta por el Estado de Guatemala mediante la suscripción consecutiva de múltiples contratos aparentemente a plazo fijo con la finalidad de interrumpir la continuidad laboral en perjuicio de los derechos mínimos reconocidos





*a favor del actor, por imperativo legal devino nulo de pleno derecho y por ende la consecuente aplicación de las normas laborales que se pretendieron soslayar. En esa misma línea y con sustento en el principio protectorio que caracteriza al Derecho Laboral, esta Cámara estima oportuno referirse al argumento que el referido Ministerio, expuso al evacuar la audiencia conferida dentro de la presente acción, relativo a que el Estado de Guatemala no está obligado a pagar daños y perjuicios, dado que conforme el artículo 108 de la Constitución Política de la República de Guatemala concatenado con el 61 numeral 7) de la Ley de Servicio Civil, en caso de supresión del puesto o despido injustificado, no obliga al pago del rubro aludido, pues de conformidad con el artículo 2 del Código de Trabajo, las normas de dicho cuerpo legal no son aplicables a las entidades de carácter público; alegato del cual, este Tribunal estima que si bien la normativa citada establece que en determinados asuntos –y que no fueron objeto del proceso subyacente- lo previsto en las mismas no serán aplicables para las entidades estatales, también lo es, que la simulación advertida en el caso bajo análisis, no se encuentra contemplada en la Ley de Servicio Civil; aunado, que el pago de daños y perjuicios devino procedente conforme lo estipulado en los artículos 102 inciso s) de la Constitución Política de la República de Guatemala y 78 inciso b) del Código de Trabajo, sin que en estas se haga distinción alguna por tener el empleador el carácter de entidad pública o no, como producto sancionador por el tiempo que éste tarde en cancelar la indemnización y las prestaciones laborales a que está obligado de conformidad con la ley, cuando no justifica la finalización de la relación de trabajo, circunstancia que como se esbozó en los párrafos precedentes, quedó demostrado en autos qué se suscitó y por ello encuadró en el aspecto fáctico regulado en las normas legales apuntadas, tornando viable su aplicación al asunto*



*objeto de examen ante la autoridad recurrida. En cuanto a lo que el citado Ministerio esgrime relativo a que atendiendo al principio de especialidad, el Reglamento de la Ley de Servicio Civil contempla hasta un máximo de dos años para el pago de vacaciones no gozadas, y al no haber vacío legal en cuanto a dicho rubro, no es dable aplicar supletoriamente lo que al respecto prevé el artículo 136 del Código de Trabajo; es necesario destacar que la Ley de Servicio Civil no estipula término alguno en cuanto al pago de dicha prestación, sin embargo, el Reglamento de la Ley de Servicio Civil en el artículo 52 regula que: (...) y por su parte el Código de Trabajo en el artículo 136 establece (...) por lo que, ante dicha disyuntiva, debe prevalecer la aplicación de la última norma citada, por ser la más favorable al trabajador, y también porque la aludida disposición reglamentaria refiere a un plazo con relación al rubro indicado, pese a que la Ley de Servicio Civil no fija término alguno. De esa cuenta, se establece que las inconformidades expuestas resultan insostenibles. Por lo antes considerado, este Tribunal Constitucional estima que la Sala reprochada actuó de conformidad con los artículos 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 372 del Código de Trabajo que le confieren la facultad de juzgar, pues con base en los medios de prueba aportados al proceso subyacente concluyó de forma razonada y acertada revocar lo dispuesto en primera instancia, al constatar que entre las partes existió una relación de carácter laboral por tiempo indefinido por haber concurrido los elementos esenciales de ésta, la cual pretendió ser encubierta por el accionante mediante figuras extralaborales, y que en aplicación de las normas jurídicas atinentes al caso concreto condenó al empleador al pago de las prestaciones y sanciones correspondientes, sin que tal decisión contraviniera los derechos constitucionales denunciados por el interponente y el hecho de que lo resuelto en el fallo reclamado no sea favorable a*



*sus intereses, no implica que la jurisdicción constitucional pueda reemplazar a la ordinaria; por lo tanto, el amparo debe denegarse y así declararse en la parte resolutive del presente fallo. De conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, no se condena en costas al postulante, por estimarse buena fe en su actuación y no se impone multa a la abogada patrocinante, por los intereses que defiende. **Y resolvió:** “(...) **I. DENIEGA** el amparo solicitado por el **ESTADO DE GUATEMALA**, contra la **SALA PRIMERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL**; **II.** No se condena en costas al postulante ni se impone multa a la abogada auxiliante (...)”.*

### III. APELACIONES

**A) Estado de Guatemala –postulante–**, apeló, para el efecto expuso que el Tribunal de Amparo de primer grado no tomó en cuenta los argumentos expuestos, causándole perjuicio la denegatoria del amparo, generando transgresión a sus derechos y garantías y que a su criterio el acto reclamado dentro de la acción constitucional es arbitraria generando agravio al postulante. Solicitó que se tenga por interpuesto el recurso de apelación contra la sentencia de amparo de primer grado y, posteriormente se remitan las actuaciones a esta Corte. **B) El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –tercero interesado–** apeló y manifestó: **i)** el Tribunal de Amparo de primer grado al emitir la sentencia inobservó el principio de seguridad jurídica contenido en los artículos 2 y 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 42 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, pues pasó inadvertido los argumentos expuestos por el postulante, respecto que, en las constancias procesales no se advierten elementos de un contrato de trabajo, derivado a que la parte actora no tuvo la calidad de trabajador del Estado sino de contratista de este y que los



contratos administrativos fueron signados de mutuo acuerdo de conformidad con lo regulado en la Ley de Contrataciones del Estado, cuyos servicios técnicos fueron a plazo fijo, por lo que no era una contratación laboral, de esa cuenta no ocurrió despido directo e injustificado y al haberse terminado el contrato por el vencimiento del plazo previamente conocido por las partes no constituye represalia; ii) “la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social” inobservó el principio de seguridad jurídica, en su vertiente certeza jurídica, pues de la contratación administrativa no se advierten elementos de una relación laboral y de esa cuenta dejó de aplicar doctrina legal sentada por esta Corte, sin embargo de forma lacónica indicó que concurrían los elementos de esta, sin corroborar las constancias procesales; iii) el Tribunal de Amparo de primer grado al denegar el amparo inobservó el principio de legalidad, derivado que no tomó en consideración que el Estado de Guatemala, contrató con respaldo en normas del derecho administrativo, de conformidad con lo estipulado en los artículos 1 y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, suplantando estas por normas del derecho laboral, dándole una naturaleza distinta a la realmente contratada, al no ser una relación de trabajo sino administrativa no le son aplicables los 18, 19 y 26 del Código de Trabajo, de tal cuenta era improcedente sostener la orden de reinstalación y el pago de salarios dejados de percibir (sic); iv) el Tribunal de amparo se limitó a señalar sobre la inamovilidad del demandante, más no entró a conocer los argumentos postulante, respecto de los elementos de un contrato de trabajo y determinar si eran no servidores públicos, para establecer si el abrigo proteccionista del artículo 380 del Código de Trabajo le era aplicable (sic) siendo obligación de este Tribunal la tutela judicial efectiva, para lo cual debió escuchar, analizar y dar respuesta en forma motivada y fundamentada a todas las argumentaciones de las partes, de esa



cuenta vulneró los derechos de defensa y a una tutela judicial efectiva; **v)** es un sofisma lo argumentado por el Tribunal de Amparo, respecto que el artículo 379 del Código de Trabajo no hace distinción en cuanto a que contratos les es aplicable dicha disposición, sin embargo el artículo mencionado y el artículo 380 del Código citado (sic), se refieren específicamente a contratos de trabajo, no obstante en el presente caso, no existió entre las partes un contrato de esa naturaleza, misma que fue dada de forma arbitraria por los órganos de la jurisdicción ordinaria, sin determinar que el contrato administrativo evidenciara cada uno de los elementos de un contrato laboral. Agregó que esta Corte ha establecido doctrina legal relacionada a que no es necesario que se solicite autorización judicial para despedir a un trabajador de confianza, debido a que no tiene razón de ser que el órgano jurisdiccional determine si la actuación del patrono configura o no represalia contra una persona que, por su alta posición jerárquica debía defender los intereses del empleador. De lo anterior, se colige la inviabilidad de que los trabajadores que desempeñen cargos de confianza pretendan obtener su reinstalación. Solicitó que se declare con lugar el recurso de apelación y, en consecuencia, se suspenda el acto reclamado, ordenando al Tribunal *a quo* dicte la sentencia que en derecho corresponda sin los vicios denunciados.

#### IV. ALEGATOS EN EL DÍA DE LA VISTA

**A) El Estado de Guatemala –postulante–**, reiteró los argumentos expuestos en el escrito inicial de amparo. Solicitó que se declare con lugar el recurso de apelación y, en consecuencia, se deje en suspenso el acto reclamado, se le ordene dicte la que en derecho corresponda. **B) El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, apelante –tercero interesado–** reiteró los argumentos expuestos en el escrito de interposición del presente recurso. Solicitó que se declare con lugar



el recurso de apelación y, consecuentemente, se otorgue el amparo y se ordene a la autoridad cuestionada dicte nueva resolución sin vicios denunciados en el amparo. **C) Carlos Juan Antonio Rodríguez Chang –tercero interesado–** manifestó que se ha comprobado que en ningún momento se han vulnerado los derechos y principios de índole constitucional invocados por el postulante. Solicitó que se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, se confirme la sentencia de amparo de primer grado. **D) El Ministerio Público** manifestó: que comparte el criterio sustentado en la sentencia de amparo de primer grado puesto que del estudio de las actuaciones se determina: **a)** que no concurren las vulneraciones constitucionales denunciadas por el postulante, evidenciando que su pretensión es que por estas vía, se revise lo decidido por la autoridad reprochada, la que ha actuado de conformidad con lo regulado en el artículo 372 del Código de Trabajo, de esa cuenta, que lo decidido por el Tribunal alzada no sea acorde a las pretensiones del postulante no implica vulneración de derechos, de ahí que lo resuelto no pueda ser motivo de revisión, por haberse cumplido con lo que disponen los artículos 203 y 204 constitucionales; **b)** no se advierte que la Sala cuestionada haya provocado agravio alguno al postulante, pues, al resolver en el sentido que lo hizo, fundamento debidamente su decisión, es decir expuso de manera clara y precisa las razones que la condujeron a esa decisión y además lo hizo en el uso de sus facultades legales. Solicitó que se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto y, como consecuencia, se confirme la sentencia de primera instancia, denegando el amparo promovido.

**CONSIDERANDO**

– I –

Esta Corte ha reconocido reiteradamente, que es función de los Jueces de





Trabajo declarar la existencia de simulación de contratos, en aquellas ocasiones en que constatan la concurrencia de elementos propios de una relación laboral, a pesar de haberse pretendido encubrir la esencia del vínculo jurídico subsistente entre las partes bajo una figura contractual diferente. La decisión que en ese sentido emitan aquellos jueces no causa agravio que amerite su reparación por vía del amparo. De manera que, la condena al pago de indemnización a consecuencia de tal declaratoria y a la finalización sin justa causa del vínculo jurídico simulado, así como al pago de las prestaciones no percibidas durante esa relación laboral y daños y perjuicios es conforme a la ley y tampoco provoca agravio en la esfera jurídica del postulante.

- II -

El Estado de Guatemala acude en amparo contra la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, señalando como acto reclamado la sentencia de diez de febrero de dos mil veintiuno, proferida por la Sala cuestionada que declaró con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el demandante y como consecuencia, revocó la emitida por el Juzgado Undécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala y declaró con lugar parcialmente la demanda ordinaria laboral por despido directo e injustificado que Carlos Juan Antonio Rodríguez Chang promovió contra el Estado de Guatemala, autoridad nominadora (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación) y lo condenó al pago de indemnización, prestaciones laborales, salario pendiente de pago daños y perjuicios

El postulante aduce que, tal proceder por parte de la autoridad cuestionada, conlleva conculcación a sus derechos, por los motivos que quedaron reseñados en el apartado de “ANTECEDENTES” del presente fallo.



La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, denegó la tutela pretendida al estimar que la Sala reprochada actuó de conformidad con los artículos 203 constitucional y 372 del Código de Trabajo que le confieren la facultad de juzgar y concluyó de forma razonada y acertada al revocar lo dispuesto en primera instancia, constatando que entre las partes existió una relación de carácter laboral por tiempo indefinido por concurrir los elementos esenciales de esta, sin que tal decisión contraviniera derechos constitucionales del postulante.

– III –

Para emitir el pronunciamiento correspondiente, este Tribunal estima pertinente precisar la actividad procesal que derivó en la emisión del auto objeto de amparo: **a)** en el Juzgado Undécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala, Carlos Juan Antonio Rodríguez Chang promovió juicio ordinario laboral contra el Estado de Guatemala (autoridad nominadora: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación) en el que reclamó el pago de indemnización, vacaciones, aguinaldo, bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, bonificación incentivo económico, salario pendiente de pago correspondiente a los quince días del mes de enero de dos mil dieciocho, daños y perjuicios, bonificación por servicios al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, bono escolar, bono por responsabilidad, bono por día del trabajador y bonificación anual, aduciendo que fue despedido el quince de enero de dos mil dieciocho de forma directa e injustificada del puesto que ocupó como “*Profesional Economista Sectorialista*” en el mencionado Ministerio, desde el uno de febrero de dos mil trece, con un salario mensual de quince mil quetzales (Q. 15,000.00); con cargo al renglón presupuestario cero veintinueve (029); **b)** el Estado de Guatemala contestó la demanda en sentido negativo argumentando que no existió relación



laboral con el actor sino la prestación de servicios técnicos mediante contratos administrativos en el renglón presupuestario cero veintinueve (029), por lo que no correspondía el pago de prestación laboral alguna **c)** el Juzgado relacionado, al resolver, en sentencia declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral promovida por Carlos Juan Antonio Rodríguez Chang contra el Estado de Guatemala al considerar que el actor acreditó una relación con plazo de vencimiento, y además, no probó la existencia de la relación de trabajo con todos sus elementos especialmente el de subordinación, jornada de trabajo y salario. Como consecuencia absolvió a la demandada de los rubros pretendidos, sin hacer especial condena en costa judiciales; **d)** contra esa decisión Carlos Juan Antonio Rodríguez Chang **—demandante—**, planteó recurso de apelación; y expuso que:

*“...se encuentra totalmente inconforme con la sentencia impugnada, toda vez que se puede apreciar, la juzgadora al emitir la sentencia de fecha 30 de abril del año 2019 (sic) en ningún momento hizo referencia a los documentos que la parte demandada omitió presentar y que fueron solicitados de conformidad con la ley, y únicamente se limitó a argumentar en las consideraciones de hecho, análisis y valoración de los medios de prueba, que su persona ‘No probó la relación de trabajo con todas sus elementos especialmente el de subordinación, Jomada de trabajo y que obtuviera un salario de conformidad con los contratos que se tienen a la vista’.*

*Como se puede apreciar, esta sentencia es totalmente violatoria a los derechos constitucionales que en materia laboral la Constitución Política de la República de Guatemala garantiza, toda vez que la señora juez es una persona versada en derecho y no puede alegar ignorancia, desuso o costumbre o prácticas en contrario en la aplicación de la ley, sin embargo, es inaudito que la juzgadora en una ignorancia total emite un fallo totalmente contrario a las normas laborales, ya que*



en ningún momento **desentraña la verdadera característica de su relación laboral con la entidad demandada.** Por tales motivos es que la sentencia emitida es NULA DE PLENO DERECHO, al contravenir las normas imperativas laborales.

**PRIMERO:** Porque en el presente caso, la carga de la prueba le corresponde al patrono (Estado de la República de Guatemala y entidad nominadora Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación), demostrar lo contrario, tal y como lo establecen los artículos 78 del Código de Trabajo que preceptúa 'La terminación del contrato de trabajo conforme a una o varias causas enumeradas en el artículo anterior, surte sus efectos desde que el patrono lo comuniqué por escrito al trabajador indicándole la causa del despido y este cese efectivamente de sus labores, pero el trabajador goza del derecho de emplazar al patrono ante los Tribunales de Trabajo y Previsión Social antes de que transcurra el término de la prescripción, con el objeto de que **pruebe la justa causa en que se fundó el despido.** Si el patrono no prueba dicha causa, debe pagar al trabajador a) Las Indemnizaciones según este código le pueda corresponder; b) A título de daños y perjuicios, los salarios que el trabajador ha dejado de percibir desde el momento del despido hasta el pago de su indemnización hasta un máximo de doce (12) meses de salarios, y las costas judiciales'. En el presente caso, se puede apreciar que EL PATRONO es el Estado de Guatemala y es el que debió probar los motivos por los cuales fue despedido en forma verbal y no por escrito, así mismo porque se corroboró que su relación laboral fue de más de cuatro años en forma continuada, ininterrumpida, porque el trabajo desempeñado como profesional economista sectorialista en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, fue sustentado en trabajos realizados directamente a la entidad demandada, como su patrono, con un jefe inmediato, con horario establecido de trabajo -como jornada



laboral-, un salario específico, y sobre todo, porque cumplió con más de los 6 meses de prueba que la Ley de Servicio Civil establece, circunstancia que en ningún momento **EL PATRONO PRUEBA SUS ARGUMENTOS, YA SEA EN FORMA DOCUMENTAL** los motivos de su despido. SEGUNDO: Porque de conformidad a lo establecido en los artículos 3, 12, 15, 17, 18 último párrafo, 19, 22 y 26 último párrafo del Código de Trabajo, en el presente caso, el derecho de acudir a un órgano jurisdiccional a solicitar el pago de las prestaciones laborales es un derecho constitucional que no debe ser disminuido ni tergiversado por autoridad alguna, por tal motivo, la sentencia emitida violenta flagrantemente los derechos constitucionales laborales otorgados por la Constitución Política de la República, al **DECLARAR SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA** planteada por su persona, reclamo que lo ha realizado dentro del plazo establecido, **ACREDITANDO DOCUMENTALMENTE la existencia de la relación laboral, bajo un contrato laboral simulado, la subordinación, continuidad, el salario devengado y el trabajo** que su persona durante muchos años prestó al Estado de Guatemala, entidad nominadora MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN". [lo anterior fue extraído del apartado "DE LO ACTUADO EN ESTA INSTANCIA" del acto reclamado, que consta a folios 22 al 25 del antecedente del juicio ordinario laboral] y **d)** la Sala cuestionada, al revocar la emitida por el Juzgado Undécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala, declaró con lugar parcialmente el recurso de apelación y con lugar parcialmente la demanda ordinaria laboral y condenó al pago de: i) indemnización, ii) vacaciones, iii) aguinaldo, iv) bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, v) bonificación incentivo (todas las prestaciones por el periodo comprendido del uno de febrero de dos mil trece al quince de enero de dos mil



dieciocho), vi) salario pendiente de pago correspondiente a los quince días del mes de enero de dos mil dieciocho y vii) daños y perjuicios; y absolvió del pago de: i) bonificación por servicios al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ii) bono escolar, iii) bono por responsabilidad, iv) bono por día del trabajador y v) bonificación anual, **—acto reclamado—**, al considerar: “(...) *La prueba dentro de un proceso funge como el mecanismo idóneo para exponer la veracidad de los hechos controvertidos y sustentar la autenticidad de las pretensiones de las partes (...) El presente caso, por ser de naturaleza laboral, existe un principio denominado ‘INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA’, el que consiste en que la parte empleadora tiene la obligación de probar todos los hechos en que sustenta su contestación (...) Sobre la prueba, la Corte de Constitucionalidad se ha pronunciado en el sentido de que, la misma es todo motivo o razón aportada al proceso por los medios y procedimientos aceptados por la ley, para proporcionarle al juez el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos en el litigio. Este elemento, una vez ofrecido, propuesto y diligenciado debe ser valorado o apreciado por el Juez, lo que implica que éste debe realizar una actividad intelectual con el objeto de determinar la fuerza probatoria relativa que tiene cada uno de los medios de prueba (...) La tarea descrita con anterioridad, el juez la confrontándolos (sic) con el resto de pruebas diligenciadas en primera instancia, se desprende contundentemente, que entre el ESTADO DE GUATEMALA, entidad nominadora MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN y CARLOS JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CHANG **existió una relación contractual continua e ininterrumpida durante el lapso de tiempo del uno de febrero del año dos mil trece al quince de febrero del año dos mil dieciocho** (sic), **y por las características que aquella revistió, fue de naturaleza laboral por tiempo***





*indefinido*, y no de otra índole y a plazo fijo como en su defensa argumentó la representante legal del Estado de Guatemala. El artículo dieciocho (18) del Código de Trabajo (aplicado supletoriamente al caso juzgado) preceptúa (...) De conformidad con lo establecido en la definición precedente, se puede afirmar que existe contrato de trabajo si se dan las siguientes condiciones fundamentales: a) la existencia de un acuerdo de voluntades para que cada parte cumpla sus obligaciones; al utilizarse la frase 'se compromete', se refiere a que el contrato se perfecciona cuando las partes prestan su consentimiento, con la aclaración de que el mismo no puede contener una renuncia a los derechos mínimos garantizados por la ley; b) que el trabajador se obligue a poner a disposición del empleador su fuerza de trabajo, que plasma en la fórmula 'El objeto del presente contrato es la Contratación de SERVICIOS PROFESIONALES como APOYO EN GENERAR E INTERPRETAR INFORMACIÓN DE PRODUCCIÓN, PRECIOS, MERCADOS Y DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS DEL SECTOR AGRÍCOLA; GENERANDO INFORMES ANALÍTICOS en PLANTEAMIENTO, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Para cumplir con la contratación, se establecen los siguientes términos de referencia (...); c) que el trabajo se pone a disposición de la empresa de otro, y el patrono lo organiza, lo aprovecha y asume los riesgos del negocio, lo que se confirma con la frase 'bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada...'; y d) Que a pesar de haberse celebrado los contratos en relación, a plazo fijo y bajo la denominación de 'contratos administrativos de servicios profesionales', **la circunstancia de haberse prorrogado de manera consecutiva durante el tiempo relacionado, lo caracteriza como un contrato de trabajo por tiempo indefinido o indeterminado.** Con fundamento en lo que postula el principio 'de realidad' o 'primacía de la realidad' como se conoce en otros



países, reconocido en el inciso d) del cuarto considerando del Código de Trabajo, el contrato de trabajo es un contrato realidad, fundado en hechos objetivos apreciables (...) Un profesional que presta sus servicios a una empresa específica, siguiendo instrucciones, en el lugar principal de la actividad de ésta, con un horario y descansos predeterminados, se encuentra estrictamente subordinado, por lo que es un trabajador y no un contratista. Debe apartarse la apariencia que las partes le dieron a la contratación, estableciéndose 'en realidad' la naturaleza jurídica de la misma, con fundamento en los hechos que se probaron. Los economistas, los abogados, los contadores públicos y auditores, los peritos contadores, entre otros, que presten sus servicios en relación de dependencia, tienen que ser considerados trabajadores, indistintamente de la utilización de figuras para encubrir el vínculo de trabajo, como lo es la locación de servicios y facturación de honorarios. Un profesional colegiado puede ser un profesional que brinda sus servicios de manera independiente, si se desenvuelve en su oficina, atiende a sus clientes, según su criterio y horario, no estando subordinado a órdenes. Se convierte en un trabajador dependiente, cuando se le asigna un horario, debe prestar sus servicios en la sede del empleador, debe estar sujeto a la autoridad de quien lo contrata y cobrar por sus actividades, una cantidad de dinero de manera regular. En el caso que se juzga, **se probó que para prestar los servicios, la parte demandante debía asistir al lugar asignado por la parte demandada y estaba sometida a un horario, conclusiones a las que se arriban con fundamento en lo contenido en los contratos de marras y demás documentos, concretamente, con las copias de la hojas de 'RESGUARDO DE BIENES', en la que se detallan los bienes que le fueron asignados al actor para que ejecutara las labores encomendadas**, siendo estos: escritorio, CPU, monitor, teclado, mouse y



computadora, **indicios suficientes para arribar a la convicción plena que los servicios eran prestados dentro de las instalaciones del instituto demandado dentro del horario especificado por el actor.** Al ejecutar el economista CARLOS JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CHANG sus servicios bajo las instrucciones, directrices u órdenes del ESTADO DE GUATEMALA, autoridad nominadora MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, en un horario específico y percibir por ello, una retribución fija mensual, indistintamente de la suscripción de contratos intitulados como 'contratos administrativos de servicios profesionales' y a plazo fijo, con fundamento en normativa de orden administrativo y civil, 'en realidad' la contratación es de naturaleza laboral, al evidenciarse la existencia de presupuestos sustantivos de un contrato de trabajo, entre los cuales, destacan como se repite, la **retribución y dependencia**. Además, se debe resaltar que la Corte de Constitucionalidad ha establecido el criterio jurisprudencial relacionado con respaldar la declaratoria de la existencia de una relación laboral por parte de los tribunales de trabajo y previsión social, cuando advierten que la entidad empleadora utiliza la figura legal de la contratación de otra naturaleza, con la finalidad de encubrir una verdadera relación de trabajo (...) Si bien es cierto, a folio ciento ocho (108) de la pieza de primer grado, se encuentra el Acuerdo Ministerial número RH –cero veintinueve – cero cincuenta y nueve – dos mil dieciocho (RH-029-059-2018), de fecha doce de abril del año dos mil dieciocho, dictado por el Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Mario Méndez Montenegro, a través del cual, se acordó 'RESCINDIR por decisión unilateral por parte del Contratado sin que ello implique responsabilidad por parte de El Ministerio', también es cierto, que este documento por sí solo no prueba que efectivamente haya sido CARLOS JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CHANG que



dirigiera oficio sin número de fecha seis de abril del año dos mil dieciocho, solicitando la terminación del contrato de servicios profesionales número tres mil doscientos cuarenta y tres guion dos mil dieciocho (3243-2018), dado que no existe ningún otro elemento probatorio que así lo evidencia, ni obra en autos, el oficio en cuestión, como tampoco fue un argumento que el ESTADO DE GUATEMALA, entidad nominadora MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN hubiere hecho valer en su defensa al momento de CONTESTAR LA DEMANDA EN SENTIDO NEGATIVO, OPONIÉNDOSE A LA MISMA, según se puede leer del contenido del escrito que está a folios del sesenta y tres (63) al sesenta y siete (67) de la pieza de primera instancia, ni fue parte de las disconformidades que se alegaron ante esta instancia para fundar los recursos de apelación presentados. Además, a la fecha en que se aduce en el contenido del acuerdo ministerial aludido, que CARLOS JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CHANG solicitó la rescisión del contrato que tenía vigente con el ESTADO DE GUATEMALA, entidad nominadora MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN (seis de abril de dos mil dieciocho), ya se había promovido el presente proceso, según consta en el sello de recepción del Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral que está estampado a folio uno (1) del legajo de primera instancia (dos de febrero del año dos mil dieciocho), inclusive, el ministerio demandado ya había sido notificado del presente juicio desde el dos de mayo del año dos mil dieciocho, como consta en la cédula de notificación número 01214-142044744, que obra a folio cuarenta y nueve (49) de la misma pieza. Y por ello, se arriba a la convicción plena que la relación contractual la que en realidad fue de naturaleza laboral, terminó el quince de enero del año dos mil dieciocho, por despido directo e injustificado como fuera



*argumentado por el actor. En cuanto al reclamo de pago de daños y perjuicios, el artículo setenta y ocho (78) del Código de Trabajo regula: (...) consecuentemente, si existe la condena al pago de la indemnización por tiempo de servicio, de su propio peso cae que debe condenarse al pago de daños y perjuicios. Ello en atención a la doctrina que tiene en la indemnización un medio de coadyuvar al desempleo, en este caso formal, y la negación de la misma debe ser sancionada, porque en justicia (en sentido no sólo legal sino moral), la sanción incluida por el legislador en el artículo referido, va dirigida a la prevalencia de la sobrevivencia del trabajador mientras dure su desligamiento laboral, sin su culpa, y en el caso de los daños y perjuicios, es innegable que no habiéndose probado la causa justa del despido, la entidad empleadora debe asumir las consecuencias de ello, en atención a decisión destinada que tomó al finalizar la relación de trabajo sin causal que produjera tal conducta. Además, no puede escindirse la norma y aplicarla sólo para un sector, puesto, perdería la característica propia de todo enunciado jurídico como es la generalidad. Y ello implica que debe aplicarse a todos sin distinción alguna, máxime que conforme a los principios generales del Derecho, entre los cuales resalta la justicia, priva el aforismo que dice que donde la ley no distingue no se vale distinguir, y las normas constitucionales relativas al trabajo, en sentido general, deben considerarse como un sistema y de esa forma ser aplicado, según el caso concreto que se juzga. A este respecto, la Corte de Constitucionalidad ha fijado jurisprudencia en cuanto a que los daños y perjuicios en materia laboral son producto sancionador para el empleador por el tiempo que éste tarde en cancelar la indemnización a que está obligado de conformidad con la ley, cuando el trabajador se ve obligado a acudir a la vía ordinaria para requerir el pago de ésta, puesto que deviene de la tardanza en que incurre el patrono en efectuar el pago*



referido, de lo cual se puede establecer que no son producto de una prestación laboral para el empleado, motivo por el cual lo decidido por la autoridad reclamada se encuentra de conformidad con la ley y las constancias procesales. (...) Por último, en relación a las pretensiones denominadas por el actor como **‘BONIFICACIÓN POR SERVICIOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN’; ‘BONO ESCOLAR’; ‘BONO POR RESPONSABILIDAD’; BONO POR DÍA DEL TRABAJADOR’ Y BONIFICACIÓN’** el tribunal al revisar detenidamente las actuaciones, se percata que no hay indicio alguno en cuanto a la existencia de las referidas reclamaciones, ya que **CARLOS JUAN ANTONIO RODRÍBUEZ CHANG** se limitó a indicar que presuntamente todos aquellos están contenidos en el pacto colectivo de condiciones de trabajo, empero, no ofreció o propuso medio de probanza alguno que acreditara tal extremo, consecuentemente, ante tal deficiencia procesal, se debe absolver a la parte demandada del pago de los mismos. En tal sentido, queda claro que la juez del Juzgado Undécimo de Trabajo y Previsión Social no actuó de acuerdo a la ley, constancias procesales, prueba ofrecida y propuesta por ambas partes, como tampoco aplicó correctamente la jurisprudencia acuñada por la Corte de Constitucionalidad, toda vez que en el presente caso, está claro que la parte demandada pretendió disfrazar la contratación de trabajo indefinida del profesional **CARLOS JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ CHANG** en una contratación administrativa de servicios profesionales a plazo fijo, cargada al renglón presupuestario cero veintinueve (029), y por ello, obligatoriamente debe condenarse al **ESTADO DE GUATEMALA**, entidad nominadora **MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN** al pago de las prestaciones laborales que en Derecho corresponden, así como la indemnización por tiempo de





*servicio y daños y perjuicios, ya que no puede alegarse como causa justa de la terminación de la relación contractual la que en realidad fue de trabajo, que haya finalizado la contratación conforme a lo convenido oportunamente entre las partes contratantes, ya que tal circunstancia no constituye una causa justificada que sea imputable a la parte actora, y al ser así, existe un despido injusto como fuera denunciado por el demandante. Este tribunal después de efectuar el análisis respectivo de los hechos sujetos a discusión, de los argumentos esgrimidos por las partes, así como de la correcta aplicación de las normas jurídicas concernientes al caso sometido a estudio, de los principios fundamentales que inspiran el Derecho Laboral, reconocidos por el Código de Trabajo, y la aplicación de lo considerado por la Corte de Constitucionalidad en los fallos anteriormente aludidos, considera procedente revocar la sentencia venida en grado, y por ello, declara **CON LUGAR PARCIALMENTE** el recurso de apelación impetrado por **CARLOS JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CHANG**, haciendo las demás declaraciones que en Derecho correspondan...”*

En ese orden de ideas, esta Corte arriba a la conclusión que debe respaldarse lo resuelto por la Sala reclamada, puesto que en forma fundada y en correcto juzgamiento de las circunstancias del caso determinó la existencia de una relación contractual continua e ininterrumpida, al establecer entre otros, la existencia de un acuerdo de voluntades, la obligación de poner a disposición del empleador la fuerza de trabajo, una dependencia continuada y dirección inmediata y la circunstancia de haberse prorrogado de manera consecutiva la relación durante el tiempo establecido. Además, tuvo por probado que la parte demandante para prestar sus servicios debía asistir al lugar asignado por la parte demandada y estaba sometida a un horario; además, con fundamento en lo contenido en los



contratos aportados y demás documentos especialmente las hojas de “RESGUARDO DE BIENES”, estableció que el actor para ejecutar las labores encomendadas tenía asignados una serie de bienes (escritorio, CPU, monitor, teclado, mouse y computadora) lo que le llevó a la convicción plena que los servicios prestados a la autoridad nominadora, que estaban sometidos a un horario específico, percibiendo por ello una retribución fija mensual, indistintamente de la suscripción de contratos intitulados como “*contratos administrativos de servicios profesionales*”, en realidad configuraron una relación de naturaleza laboral, al evidenciarse la existencia de presupuestos sustantivos de un contrato de trabajo. Adicional a ello, determinó que entre las partes existió una relación contractual continua e ininterrumpida durante el lapso del uno de febrero de dos mil trece al “*quince de febrero de dos mil dieciocho*” y por las características que aquella revistió, fue de naturaleza laboral por tiempo indefinido. Además, estableció que la parte demandada no puede alegar justa causa de la terminación de la relación contractual, la que en realidad fue de trabajo y que la circunstancia de que haya finalizado conforme a lo convenido oportunamente por las partes, no constituye causa justificada imputable a la parte actora, y al ser así, existió despido injusto como fuera denunciado por el demandante. Además, efectuó el análisis respectivo de los hechos sujetos a discusión, de los argumentos esgrimidos por las partes, así como la correcta aplicación de las normas jurídicas concernientes al caso sometido a estudio, los principios fundamentales que inspiran el Derecho Laboral, reconocidos por el Código de Trabajo y fallos de esta Corte, por lo que, fue correcta la actuación de la Sala al revocar la sentencia conocida en grado, al establecer que la finalización de la relación laboral del trabajador sin causa justificada (cuando prestaba sus servicios como “*Profesional Economista Sectorialista*” en el



mencionado Ministerio), genera el pago de indemnización, y que al no haber recibido la parte actora las prestaciones laborales a que tenía derecho durante la subsistencia del vínculo laboral, procedente era la condena al pago de estas, así como lo relativo a los daños y perjuicios, como un producto sancionador para el empleador por el tiempo que éste tarde en cancelar la indemnización a que está obligado de conformidad con la ley –hasta un máximo de diez meses de salario-, cuando el trabajador se ve obligado a acudir a la vía ordinaria para requerir el pago de ésta, de conformidad con el artículo 78 literales a) y b), del Código de Trabajo (El criterio relativo a la naturaleza sancionadora de los daños y perjuicios que surge como consecuencia de la declaratoria de un despido injusto, por haber finalizado su relación de forma directa e injustificada, ha sido sostenido por este Tribunal en las sentencias de once y veintitrés, ambas de noviembre de dos mil veintiuno, treinta y uno de enero y diez de noviembre de dos mil veintidós, proferidas en los expedientes 2119-2021, 4768-2021, 1524-2021 y 3471-2022, respectivamente). Por ende, ningún agravio ocasionó al postulante.

Si los tribunales ordinarios hicieron valoración respecto de la naturaleza jurídica de la relación sostenida entre el ahora postulante y la trabajadora, sus apreciaciones al respecto no pueden ser suplidas por el juez constitucional, salvo evidente violación, la que en este caso no se aprecia. El criterio relativo a respaldar la declaratoria de la existencia de una relación laboral por parte de los Tribunales de Trabajo y Previsión Social, cuando advierten que la entidad empleadora utiliza la figura legal de la contratación de servicios bajo renglones presupuestarios que acogen contrataciones de otra naturaleza, con la finalidad de encubrir una verdadera relación de trabajo, se encuentra contenido en las sentencias emitidas por este Tribunal el uno y veintitrés, ambas de febrero de dos mil veintidós, cinco



de mayo de dos mil veintidós y dos de noviembre de dos mil veintitrés, dentro de los expedientes 1972-2021, 1584-2021, 1726-2021 y 4253-2023, respectivamente.

Respecto de la inconformidad expuesta por el Estado postulante, relativa a que entre las partes no existió una relación laboral, pues la actora suscribió contratos administrativos de servicios técnicos, conforme a las normas de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, pactándose el pago de honorarios, sujetos al régimen tributario y que la relación contractual que se estableció entre las partes no tuvo como fundamento el Código de Trabajo, lo cual, no generó la obligación de pago prestaciones laborales, se debe indicar, que al haber establecido la Sala cuestionada la existencia de una relación laboral por tiempo indefinido, se desvanece la posibilidad de aplicación de las disposiciones contenidas en tales normativas y que a juicio del accionante sustentan una contratación administrativa temporal, por versar estas sobre materia distinta de la advertida por aquella Sala.

Por último, para que ninguna cuestión quede irresuelta, respecto al reproche formulado en apelación por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, mediante el cual señala que existe doctrina legal de esta Corte relacionada a que es inviable que los trabajadores que desempeñen cargos de confianza pretendan obtener su reinstalación. Esta corte estima pertinente señalar que en el caso concreto no es dable darle respuesta de manera particularizada a los argumentos que en ese sentido esbozó, ello porque no guardan relación ni consonancia con las aristas particulares del presente asunto (pago de indemnización y prestaciones laborales).

Con base en las consideraciones expuestas, esta Corte concluye que la Sala cuestionada, al emitir el acto reclamado, no causó agravio al accionante que



amerite su reparación por vía del amparo, ya que del análisis realizado manifiesta la inexistencia de afectación de derechos del postulante, por lo que el mismo es notoriamente improcedente y, por ende, se debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Estado de Guatemala –postulante– y, como consecuencia, el amparo instado debe denegarse, y habiéndose resuelto en igual sentido en primera instancia, es procedente confirmar el fallo venido en grado, por las razones consideradas.

### **LEYES APLICABLES**

Artículos citados y 265, 268 y 272 literal c), de la Constitución Política de la República de Guatemala; 8º, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 149, 163 literal c), 179 y 185 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 7 *Bis* del Acuerdo 3-89 y 36 y 46, del Acuerdo 1-2013, ambos de la Corte de Constitucionalidad.

### **POR TANTO**

La Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado y leyes citadas al resolver declara: **I)** Por ausencia temporal de los Magistrados Leyla Susana Lemus Arriaga, Roberto Molina Barreto y Héctor Hugo Pérez Aguilera, se integra el Tribunal con los Magistrados Juan José Samayoa Villatoro, Luis Alfonso Rosales Marroquín y Rony Eulalio López Conteras, para conocer y resolver el presente asunto. **II. Sin lugar** los recursos de apelación interpuestos por el Estado de Guatemala –**postulante**– y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –**tercero interesado**– y, como consecuencia, **confirma** la sentencia de primer grado, por las razones consideradas. **III.** Notifíquese y, con certificación de lo resuelto, devuélvase los antecedentes.



